

**Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de abril de 2013 — Comisión Europea/República Checa**(Asunto C-109/11) <sup>(1)</sup>

*(Incumplimiento de Estado — Fiscalidad — Directiva 2006/112/CE — Artículos 9 y 11 — Normativa nacional que permite la inclusión de personas que no sean sujetos pasivos en un grupo de personas que pueda considerarse un único sujeto pasivo del IVA)*

(2013/C 171/08)

Lengua de procedimiento: checo

**Partes**

*Demandante:* Comisión Europea (representantes: R. Lyal y D. Triantafyllou, así como por K. Walkerová y P. Němečková agentes)

*Demandada:* República Checa (representantes: M. Smolek, T. Müller y J. Očková, agentes)

*Partes coadyuvantes que intervienen en apoyo de la parte demandada:* Reino de Dinamarca (representantes: inicialmente C. Vang, y posteriormente V. Pasternak Jørgensen, agentes), Irlanda (representantes: D. O'Hagan, agente, asistido por G. Clohessy, SC, y N. Travers, BL), República de Finlandia (representantes: H. Leppo y S. Hartikainen, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: H. Walker, agente, asistido por M. Hall, QC)

**Objeto**

Incumplimiento de Estado — Infracción de los artículos 9 y 11 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347, p. 1) — Normativa nacional que autoriza a personas que no sean sujetos pasivos a convertirse en miembros de un grupo a efectos del IVA.

**Fallo**

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Condenar en costas a la Comisión Europea.
- 3) El Reino de Dinamarca, Irlanda, la República de Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

<sup>(1)</sup> DO C 160, de 28.5.2011.

**Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de abril de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo — España) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado**(Asunto C-212/11) <sup>(1)</sup>

*(Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Directiva 2005/60/CE — Artículo 22, apartado 2 — Decisión 2000/642/JAI — Obligación de comunicación de las transacciones financieras sospechosas a cargo de las entidades de crédito — Entidad que opera bajo el régimen de la libre prestación de servicios — Determinación de la unidad nacional de información financiera responsable de la obtención de la información — Artículo 56 TFUE — Restricción a la libre prestación de servicios — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad)*

(2013/C 171/09)

Lengua de procedimiento: español

**Órgano jurisdiccional remitente**

Tribunal Supremo

**Partes en el procedimiento principal***Demandante:* Jyske Bank Gibraltar Ltd*Demandada:* Administración del Estado**Objeto**

Petición de decisión prejudicial — Tribunal Supremo — Interpretación del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309, p. 15) — Normativa nacional que exige, de modo imperativo y directo, a las entidades de crédito que operan en el territorio nacional sin disponer de un establecimiento permanente que faciliten a las autoridades nacionales competentes la información requerida.

**Fallo**

El artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios en el territorio de ese Estado miembro la obligación de comunicar directamente a la unidad de información financiera de dicho Estado miembro la información requerida a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, siempre que dicha normativa no comprometa el efecto útil de la citada Directiva y de la Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros para el intercambio de información.

El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de este tipo si ésta se justifica por una razón imperiosa de interés general, es adecuada para garantizar la realización

del objetivo que persigue, no va más allá de lo necesario para alcanzarlo y se aplica de forma no discriminatoria, extremos que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional, habida cuenta de las siguientes consideraciones:

- tal normativa es adecuada para lograr el objetivo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo si permite al Estado miembro afectado controlar y suspender efectivamente las transacciones financieras sospechosas realizadas por las entidades de crédito que prestan sus servicios en el territorio nacional y, en su caso, perseguir y sancionar a los responsables;
- la obligación impuesta por dicha normativa a las entidades de crédito que ejercen sus actividades en libre prestación de servicios puede constituir una medida proporcionada para lograr dicho objetivo si, en el momento de los hechos del litigio principal, no existía un mecanismo eficaz que garantizara una cooperación plena y completa de las unidades de información financiera.

(<sup>1</sup>) DO C 226, de 30.7.2011.

#### **Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 25 de abril de 2013 — Comisión Europea/República Eslovaca**

(Asunto C-331/11) (<sup>1</sup>)

**(Incumplimiento de Estado — Directiva 1999/31/CE — Vertido de residuos — Artículo 14 — Vertedero existente — Inexistencia de un plan de acondicionamiento de las instalaciones — Posibilidad de continuar las operaciones)**

(2013/C 171/10)

Lengua de procedimiento: eslovaco

#### **Partes**

**Demandante:** Comisión Europea (representantes: A. Marghelis y A. Tokár, agentes)

**Demandada:** República Eslovaca (representante: B. Ricziová, agente)

#### **Objeto**

Incumplimiento de Estado — Infracción del artículo 14, letras a), b) y c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182, p. 1) — Posibilidad de continuar las operaciones del vertedero Žilina — Považský Chlmec cuando no existe un plan de acondicionamiento de las instalaciones.

#### **Fallo**

- 1) La República Eslovaca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al autorizar la explotación del vertedero de Žilina — Považský Chlmec sin un plan de acondicionamiento y sin que se haya adoptado una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones con arreglo a un plan de acondicionamiento aprobado.

- 2) Condenar en costas a la República Eslovaca.

(<sup>1</sup>) DO C 282, de 24.9.2011.

#### **Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de abril de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Ireland — Irlanda) — Thomas Hogan y otros/Minister for Social and Family Affairs y otros**

(Asunto C-398/11) (<sup>1</sup>)

**(Procedimiento prejudicial — Política social — Aproximación de las legislaciones — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 2008/94/CE — Ámbito de aplicación — Regímenes complementarios de previsión profesionales — Planes de pensiones de prestación definida y con costes equilibrados — Insuficiencia de recursos — Nivel mínimo de protección — Crisis económica — Desarrollo económico y social equilibrado — Obligaciones del Estado miembro en cuestión en caso de insuficiencia de recursos — Responsabilidad del Estado miembro en caso de transposición incorrecta)**

(2013/C 171/11)

Lengua de procedimiento: inglés

#### **Órgano jurisdiccional remitente**

High Court of Ireland

#### **Partes en el procedimiento principal**

**Demandantes:** Thomas Hogan, John Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

**Demandadas:** Minister for Social and Family Affairs, Ireland, Attorney General

#### **Objeto**

Petición de decisión prejudicial — High Court of Ireland — Interpretación del artículo 1, apartado 1, y 8, de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 36) — Regímenes complementarios de previsión profesionales — Insuficiencia de recursos de dichos regímenes — Normativa nacional que no prevé un fundamento jurídico que permita a los trabajadores asalariados obtener una indemnización de su empresario a raíz de la insolvencia de la empresa — Obligación para el Estado miembro de que se trate de adoptar las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados — Elementos que el juez nacional ha de tomar en consideración al apreciar el cumplimiento de la referida obligación.

#### **Fallo**

- 1) La Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los derechos de los antiguos trabajadores a las prestaciones de vejez de un plan de pensiones complementario promovido por el empresario para el que trabajaban.